

En Santiago, a cinco de mayo del año dos mil veintidós

VISTOS,

Que, a folio 1 comparece MARÍA TRINIDAD COFRÉ NUÑEZ, cédula de identidad N°10.074.248-9, domiciliada en Atahualpa N°51678, comuna de Estación Central, región Metropolitana, quien deduce demanda por despido indebido, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales, declaración de subcontratación, en subsidio, declaración de empleador, co-empleador y/o unidad económica en contra de SERVICIOS INTEGRALES C Y C LTDA., rol único tributario N°76.034.190-8, representada legalmente por MARIO CARRASCO ROMERO, cédula de identidad N°9.586.269-1, ambos domiciliados en calle Europa N°2084, comuna de Providencia, solidaria o subsidiariamente en contra de THERMAS INTERNACIONAL SANTIAGO DE CHILE S.A., rol único tributario, N°96.712.360-9, representada legalmente por REGINO CONTRERAS ORTIZ, cédula de identidad N°9.687.091-4, ambos domiciliados en calle Europa N°2084, comuna de Providencia.

Funda su demanda en que inició la relación laboral con la demandada THERMAS INTERNACIONAL SANTIAGO DE CHILE S.A. con fecha 01 de diciembre de 2009. Indica que luego se le solicitó firmar un contrato con SERVICIOS INTEGRALES C Y C LIMITADA, pero siempre desempeñando la misma función de operadora de telemarketing y posteriormente supervisora de telemarketing en el mismo domicilio de la empresa THERMAS INTERNACIONAL SANTIAGO DE CHILE S.A., que en ese momento se encontraba en Av. Los Leones N°2595, comuna de Providencia.

Por los servicios prestados la demandante afirma que percibía una remuneración de \$350.215.- (Trescientos cincuenta mil doscientos quince pesos). Indica que el 25 de enero de 2021, fue despedida recibiendo la carta de despido en su domicilio, la cual señala como causal del despido “no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres día durante igual período de tiempo; así mismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra”. La carta de despido indica todas las



hipótesis que señala dicha norma para configurar dicha causal, que por sí misma no cumple con la normativa legal, pues deja a la actora en total indefensión.

Relata que, a partir del mes de abril del año 2020, producto de la pandemia, se acogió al programa de protección del empleo, por lo tanto, la relación laboral estaba vigente, pero suspendida. Señala que el empleador tenía que confirmar el día en que la actora debía retomar sus funciones, pero sin aviso alguno, le llegó a su domicilio la carta de despido donde se señala que supuestamente había faltado al trabajo desde el día 04 de enero de 2021 en adelante, lo que sostiene es completamente falso, pues la relación laboral se encontraba suspendida. Con fecha 25 de enero de 2021, el ex empleador revocó el pacto convenido por reanudación de labores, sin dar aviso a la actora y por ende el último pago que tenía fecha 05 de febrero nunca lo pudo obtener.

Al momento del despido indica que se le adeudaban las cotizaciones en los organismos de seguridad social del mes de noviembre de 2015, octubre del 2017, algunos meses del 2018, del 2019, del 2020 y del 2021. En razón de lo expuesto precedentemente se solicita que se acoja la demanda declarando que el despido es indebido e injustificado, además de nulo, condenando a la demandada al pago de indemnización sustitutiva de aviso previo por un monto de \$350.215.- (Trescientos cincuenta mil doscientos quince pesos), indemnización por 11 años de servicio por el monto de \$3.852.365.- (Tres millones ochocientos cincuenta y dos mil trescientos sesenta y cinco pesos), recargo legal del 80% por un total de \$3.081.892.- (Tres millones ochenta y un mil ochocientos noventa y dos pesos), vacaciones legales por un total de 42 días corridos, por el monto de \$490.301.- (Cuatrocientos noventa mil trescientos un pesos), vacaciones proporcionales correspondientes a 3,15 días corridos por un monto de \$36.773.- (Treinta y seis mil setecientos setenta y tres pesos), cotizaciones de seguridad social pendientes, nulidad del despido debiendo pagar todas las remuneraciones desde la fecha del despido y hasta su convalidación, reajustes, intereses y costas de la causa.

En cuanto a la responsabilidad solidaria o subsidiaria de THERMAS INTERNACIONAL SANTIAGO DE CHILE S.A. es importante indicar que SERVICIOS INTEGRALES CYC LTDA., quien es en el último tiempo el empleador directo de la actora, es contratista de THERMAS INTERNACIONAL, quien tiene la calidad de



mandante o empresa principal. Dado lo anterior, se hace aplicable que la responsabilidad de la misma sea solidaria. Para el caso que la empresa haya hecho uso de información y retención contemplado en el código del trabajo, la responsabilidad de la misma debería ser subsidiaria.

Alega en subsidio de lo anterior que las dos demandadas funcionan, en la realidad de los hechos, como una sola empresa, lo cual claramente es realizado por las demandadas, con el único objetivo de explotar en conjunto los giros, o tratar de ocultar o disfrazar o alterar la individualización o patrimonio con el único objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales. Por ello solicita su condena en forma solidaria.

A folios 5 y 15 consta notificación de la demanda.

La demandada THERMAS INTERNACIONAL SANTIAGO DE CHILE S.A. contestó, negando todas las afirmaciones señaladas por la actora en su demanda. En especial niega que entre las demandadas exista algún tipo de relación de la cual pueda inferirse ambas empresas conforman una unidad económica, ni una relación de subcontratación. Señala que no ha existido vínculo comercial, contractual, ni societario del cual pueda desprenderse, ni suponerse algún tipo de relación como la que indica la demandante. Tampoco existe un contrato de prestación de servicios, de ningún tipo, ni aún para tercerizar sus procesos productivos o de selección y administración de personal.

En mérito de lo expuesto, se solicita que se rechace la demanda en todas sus partes, con expresa condena en costas.

La demandada CYC LTDA. contestó, reconoce la relación laboral entre el 01 de julio de 2010 y al 25 de enero de 2021, que la remuneración de la actora era de \$350.215.- (Trescientos cincuenta mil doscientos quince pesos), que la jornada era de 32 horas semanales. Cabe señalar que la actora presentó licencias médicas desde septiembre de 2015, hasta abril de 2020, por lo que estuvo sin prestar efectivamente servicios por casi 5 años a causa de estas licencias médicas.

El pacto de suspensión laboral se firmó el día 02 de mayo de 2020 hasta diciembre del mismo año. Indica que se puso término al contrato invocando la causal de que la actora



no concurrió a sus labores sin causa justificada. Sostiene que las cotizaciones previsionales a la fecha se encuentran pagadas.

La actora se encontraba con el beneficio de suspensión laboral, por el cual recibió el último pago con fecha 08 de enero de 2021, ya que ese mes terminó el beneficio para todos los trabajadores y se les informó a todos que debían volver a cumplir sus labores en el mes de enero de 2021. Señala que en ese momento la actora no lo hizo, faltando a su obligación de concurrir a trabajar desde el 04 al 24 de enero de 2021. Es por esa razón, que con fecha 13 y 19 de enero de 2021, se presentó las constancias correspondientes ante la Inspección del Trabajo señalando que doña Milagros no se presentó a trabajar, a pesar de haber sido revocado el pacto de suspensión.

Respecto de la acción de unidad económica, señala que no se dan en la especie los requisitos que contempla la ley, para que SERVICIOS INTEGRALES C. Y C. LIMITADA y THERMAS INTERNACIONAL SANTIAGO DE CHILE S.A., sean consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, o se les declare empresas ligadas por un régimen de subcontratación respecto del actor.

Se solicita en definitiva que se desechen expresamente las peticiones subsidiarias de declaración de único empleador y de régimen de subcontratación, intentadas por la actora, con expresa condena en costas.

Habiendo el Tribunal llamado a conciliación, ésta no se produce. El Tribunal propone como bases de conciliación la suma de \$2.600.000.- (Dos millones seiscientos mil pesos). La parte demandante propone la suma de \$3.000.000.- (Tres millones de pesos). Por su parte, la demandada no acepta ninguna de las bases propuestas.

CONSIDERANDO,

PRIMERO: Que, en la audiencia preparatoria se celebró una convención probatoria consistente en que la demandada principal Servicios Integrales C y C Limitada reconoció antigüedad laboral de la actora a partir del 21 de diciembre del año 2009. Asimismo, se fijaron por el tribunal como hechos pacíficos que la función desempeñada por la trabajadora era de supervisora de telemarketing, que su última remuneración fue por la



suma de \$350.215.- y que la fecha del despido fue el 25 de enero del 2021, por la causal del artículo 160 N°3 del Código del Trabajo.

En la misma audiencia se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos controvertidos los siguientes:

1. Efectividad de los hechos invocados para poner término a los servicios de la actora.
2. Prestaciones adeudadas a la demandante al momento y con ocasión del término de sus servicios. Naturaleza y monto.
3. Estado de pago de las cotizaciones previsionales de la demandante.
4. Efectividad que la demandante prestó servicios bajo régimen de subcontratación para la demandada Thermas Internacional Santiago de Chile S.A, y el periodo en que ello se habría verificado. En la negativa, efectividad que las demandadas constituyen una unidad económica en los términos del artículo 3 del Código del Trabajo.

SEGUNDO: Que, en la audiencia de juicio las partes incorporaron la siguiente prueba:

A) Demandante:

I. Documental:

1. Contrato de trabajo de fecha 1 de diciembre de 2009, junto a contrato de trabajo de fecha 21 de diciembre de 2009, anexo de contrato de fecha 1 de enero de 2020, anexo de contrato de fecha 31 de enero de 2020, contrato de trabajo de fecha 1 de julio de 2010, anexo de contrato de trabajo de fecha 1 de julio, anexo de contrato de fecha 1 de diciembre de 2010.
2. Carta dirigida a Caja de compensación 18 de septiembre, firmada por Regino Contreras.
3. Carta de despido de fecha 25 de enero de 2021, junto a copia de sobre de envío.
4. Certificado de Beneficios, Ley de Protección del empleo, de fecha 2 de febrero de 2021, junto a consulta de Pactos, con fechas de giro entre el 29 de mayo de 2020 al 5 de febrero de 2021, todos emitidos por la AFC CHILE S.A.



5. Certificado de Deuda afiliado, de AFP HABITAT de fecha 29 de enero de 2021.

6. Certificado de cotizaciones previsionales de AFC CHILE S.A. de fecha 29 de enero de 2021.

II. Oficios: se incorporaron las respuestas a oficios de las siguientes instituciones;

1. AFP Habitat

2. AFC Chile

3. FONASA

III. Exhibición de documentos: El tribunal ordenó en audiencia preparatoria, a petición de la demandante, que la demandada exhibiera los siguientes documentos:

1. Los comprobantes de vacaciones firmados por la trabajadora por todos los periodos que se reclaman en la demanda. (no se exhibe)

2. Los comprobantes de pago de cotizaciones, por todos los periodos e instituciones que se reclaman en la demanda. (no se exhibe)

3. Que ambas demandadas exhiban, las escrituras de constitución de sociedad, sus modificaciones, junto a los certificados de inscripción actualizados con sus notas marginales del Registro de Comercio de Santiago. (no se exhibe)

Que en cuanto a la solicitud de aplicación del apercibimiento del art. 453 N°5 respecto de los puntos 1 y 2, a juicio del tribunal se cumplen los requisitos respecto a la existencia de obligación legal de que la demandada cuente con los documentos en su poder. Respecto al feriado, además de tener la obligación de llevar registro de asistencia según el art. 33 del Código del Trabajo, los artículos 67 y siguientes que reglamentan el uso del feriado dan cuenta de la necesidad de acuerdo entre las partes para su otorgamiento y de la forma de contabilización, lo que supone necesariamente el registro del uso del feriado por el trabajador. En el caso de los comprobantes de pago de cotización, el art. 58 dispone expresamente la obligación de descuento y pago a las instituciones por lo que corresponde que los documentos que acrediten dicha circunstancia obren en su poder. Sin perjuicio de lo anterior, la demandada en su prueba documental acompañó varios de los certificados solicitados, en su prueba documental, documentos 4 al 10 ambos inclusive y 16 al 21, también ambos inclusive. Por ello, respecto del punto 2 solo se aplicará la sanción de tener



por probados los hechos alegados por la demandada, solo en cuanto a los periodos cuyo pago de cotizaciones no se exhibió, y sobre la existencia de feriado no otorgado ni compensado.

En cuanto al tercer punto, esto es la exhibición de escrituras de constitución y certificados de inscripción con notal al margen, no se ha justificado debidamente la existencia de una obligación legal de las demandadas de que dichos documentos obren en su poder. Por ello, no se aplicará la sanción indicada.

IV. Otros medios de prueba: se solicitó tener a la vista las causas RIT O-7678-2020; RIT O-7007-2020; RIT M-568-2020; RIT M- 394- 2020; RIT M-88-2020 y RIT O-3509-2021, todas tramitadas ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

B) Demandada principal:

I. Documental:

1. Contrato de trabajo suscrito entre María Trinidad Cofré Núñez y Servicios Integrales C y C LTDA, con fecha 1 de julio de 2010.
2. Acuerdo de suspensión temporal de trabajo, acordado entre el empleador y empleado, con 2 de mayo de 2020.
3. Detalle de pagos, consulta y modificación de pactos de suspensión laboral suscritos por Servicios Integrales C y C con María Trinidad Cofré Núñez, con fecha 21 de enero de 2021.
4. Certificado de pago de cotizaciones previsionales pagadas a cuenta individual por cesantía desde enero a diciembre de 2015, de doña María Trinidad Cofré Núñez, emitido por AFC Chile S.A con fecha 6 de julio de 2021.
5. Certificado de pago de cotizaciones previsionales pagadas a cuenta individual por cesantía desde enero a diciembre de 2016, de doña María Trinidad Cofré Núñez, emitido por AFC Chile S.A con fecha 6 de julio de 2021.
6. Certificado de pago de cotizaciones previsionales pagadas a cuenta individual por cesantía desde enero a diciembre de 2017, de doña María Trinidad Cofré Núñez, emitido por AFC Chile S.A con fecha 6 de julio de 2021.



7. Certificado de pago de cotizaciones previsionales pagadas a cuenta individual por cesantía desde enero a diciembre de 2018, de doña María Trinidad Cofré Núñez, emitido por AFC Chile S.A con fecha 6 de julio de 2021.
8. Certificado de pago de cotizaciones previsionales pagadas a cuenta individual por cesantía desde enero a diciembre de 2019, de doña María Trinidad Cofré Núñez, emitido por AFC Chile S.A con fecha 6 de julio de 2021.
9. Certificado de pago de cotizaciones previsionales pagadas a cuenta individual por cesantía desde enero a diciembre de 2020, de doña María Trinidad Cofré Núñez, emitido por AFC Chile S.A con fecha 6 de julio de 2021.
10. Certificado de cotizaciones previsionales pagadas desde el año 2010 al año 2020, emitido por la AFP Habitat con fecha 1 de julio de 2021.
11. Carta de aviso de término de contrato emitida por Servicios Integrales C y C LTDA hacia doña Maria Trinidad Cofré Núñez con fecha 25 de enero de 2021.
12. Comprobante de carta de aviso de término de contrato, emitido por la Inspección del Trabajo con fecha 25 de enero de 2021.
13. Certificado de envío de carta de aviso de término de contrato, emitido por Correos Chile con fecha 25 de enero de 2021.
14. Comprobante constancia laboral para empleadores, remitida a la Inspección del Trabajo, por la no concurrencia a trabajar de doña Maria Trinidad Cofré Núñez, realizada por el empleador Servicios Integrales C y C LTDA con fecha 13 de enero de 2021.
15. Comprobante constancia laboral para empleadores, remitida a la Inspección del Trabajo, por la no concurrencia a trabajar de doña Maria Trinidad Cofré Núñez, realizada por el empleador Servicios Integrales C y C LTDA con fecha 19 de enero de 2021.
16. Certificado de pago de cotizaciones previsionales desde agosto de 2010 a enero de 2012 de María Trinidad Cofré Núñez, emitido por PREVIRED con fecha 1 de julio de 2021.
17. Certificado de pago de cotizaciones previsionales desde febrero de 2012 a enero de 2014 de María Trinidad Cofré Núñez, emitido por PREVIRED con fecha 1 de julio de 2021.



18. Certificado de pago de cotizaciones previsionales desde febrero de 2014 a enero de 2016 de María Trinidad Cofré Núñez, emitido por PREVIRED con fecha 1 de julio de 2021.
19. Certificado de pago de cotizaciones previsionales desde febrero de 2016 a julio de 2018 de María Trinidad Cofré Núñez, emitido por PREVIRED con fecha 1 de julio de 2021.
20. Certificado de pago de cotizaciones previsionales desde agosto de 2018 a enero de 2021 de María Trinidad Cofré Núñez, emitido por PREVIRED con fecha 1 de julio de 2021.
21. Comprobantes de transferencias realizadas por Servicios Integrales C y C LTDA a Eleven asesorías LTDA, correspondientes al pago de la AFC de la actora.
22. Copia del libro de asistencia de trabajadores, de la demandada, empresa SERVICIOS INTEGRALES C Y C LIMITADA, correspondiente a la actora doña MARIA TRINIDAD COFRÉ NUÑEZ, correspondiente al mes de enero de 2021.
23. Informe de fiscalización realizado por la Inspección del Trabajo, específicamente por la funcionaria doña María Carla Baeza, de fecha 2 de mayo de 2018, en el cual se concluye que no existe unidad económica entre CONSTRUCTORA Y THERMAS INTERNACIONAL SANTIAGO DE CHILE y SERVICIOS INTEGRALES C Y C LIMITADA.

II. Exhibición de documentos: el tribunal ordeno en audiencia preparatoria, a petición de la demandada, que la demandante exhibiera los siguientes documentos:

1. Todos los documentos referentes a las licencias médicas presentadas durante la vigencia de la relación laboral en forma pormenorizada (no se exhibe).

Respecto a la solicitud de aplicación del apercibimiento del artículo 453 N°5 del Código del Trabajo, no se justificó a juicio del tribunal la existencia de una obligación legal de la demandante, de que los documentos señalados deban obrar en su poder. Faltando tal requisito fundamental para aplicar la sanción pretendida, esta no podrá prosperar.



TERCERO: Que el primer punto d prueba dice relación con la efectividad de los hechos de la carta de despido. Al respecto se acompañó carta de aviso de despido de fecha 25 de enero del año 2021. Dicha carta dirigida a la demandante señala que se ha resuelto poner término a su contrato de trabajo por la causal del artículo 160 número 3 del Código del Trabajo y a continuación se transcribe la norma completa. Enseguida se señala que los días de falta son desde el 04 de enero de 2021 a la fecha. La carta tiene RUT y timbre de la empresa. Se acompaña comunicación a la inspección del trabajo de la misma fecha y comprobante de envío mediante correo certificado también de la misma fecha. Con lo anterior se ha acreditado el cumplimiento de las formalidades del despido de acuerdo al artículo 162 del Código Del Trabajo.

En cuanto al contenido de la carta efectivamente se incurrió en el error que denuncia la parte demandante en relación con que no se explicita de forma clara cuál de las hipótesis del artículo 160 número 3 es la que se está alegando al transcribirse el artículo de forma completa. Esta circunstancia no es un error que vicie el cumplimiento de las formalidades del despido, conforme a lo dispuesto en el propio artículo 162 del Código del Trabajo. Sin embargo, dicha circunstancia impide establecer de forma clara cuál es la hipótesis por la cual la trabajadora está siendo despedida dado que a continuación tampoco se detalla de forma clara los hechos que fundan la causal pues sólo se indican las fechas en que la trabajadora no habría concurrido a prestar servicios. Con ello no resulta claro si, con tales inasistencias se imputará trabajadora la falta de 2 días seguidos, de 2 días lunes en el mes o de 3 días en el mes o una falta injustificada que de un trabajador que tuviera a su cargo una faena o máquina que perturbara la marcha normal de la empresa. Si bien las primeras 3 hipótesis son similares en relación con que sólo requieren para su concurrencia la inasistencia, la última hipótesis requiere un componente adicional, que es el hecho de que el trabajador tenga a su cargo una máquina faena que perturbe la marcha de la empresa. En tal sentido la falta de especificidad de la causal invocada impide ejercer una adecuada defensa. En cualquiera de los casos los hechos fundantes del despido son los mismos que la trabajadora no prestó servicios sin causa justificada entre el 4 y el 25 de enero del año 2021.

Estos hechos se encuentran parcialmente reconocidos en el proceso dado que la trabajadora no ha controvertido el hecho de no haber regresado a prestar servicios luego de



la suspensión reconociendo en consecuencia que efectivamente los días señalados no asistió a prestar servicios. Sin embargo, la controversia se encuentra la existencia de una justificación para dichas inasistencias. Al respecto la trabajadora señala en su demanda que el motivo de las inasistencias es que, una vez finalizada la suspensión, no fue notificada debidamente del reintegro a sus labores, desconociendo tal circunstancia.

En tal sentido conforme al artículo 454 número uno del Código del Trabajo corresponde a la demanda de acreditar los hechos que fundan su carta de despido. en el caso los hechos son la inasistencia y la falta de justificación. Normalmente si la justificación se refiere a un asunto externo propio del trabajador, cómo podría ser una emergencia una enfermedad sobreviviente o alguna otra circunstancia que le impidiera prestar servicios, sería éste quien debe acreditar tal justificación. Sin embargo, la especial circunstancia que se plantea en autos requiere que el empleador sea quien acredite haber convocado a la trabajadora a prestar servicios luego del término de la suspensión. Lo anterior se funda principalmente en los términos en que fue pactado la suspensión temporal del contrato de trabajo, según anexo de contrato acompañado de fecha 2 de mayo del año 2020. Este acuerdo señala en su cláusula cuarta que en virtud de la existencia de la crisis sanitaria y del Decreto Supremo número 104 del Ministerio del interior y Seguridad Pública, que declara el estado de excepción constitucional a partir del 18 de marzo del año 2020, el empleador decidió cerrar temporalmente la empresa suspendiendo las labores para todos sus trabajadores hasta la superación de la crisis o hasta el levantamiento de las medidas decretadas por la autoridad competente. En este sentido, de la simple lectura del acuerdo la suspensión, se puede identificar que esta encuentra supeditada a 2 circunstancias que a la fecha del despido no habían ocurrido; y estas son (i) la superación de la crisis -cuestión que evidentemente no ha ocurrido pues aún nos encontramos en medio de la pandemia-; y (ii) el alzamiento de las medidas decretadas por la autoridad. En este último caso, la única medida tomada por la autoridad a la que se hace referencia el acuerdo es el estado de excepción constitucional de fecha 18 de marzo del 2020, el que sólo fue levantado el 30 de septiembre del año 2021. Producto de lo anterior, a la fecha del despido no se habían cumplido ninguno de los requisitos que la propia empleadora expresó en el acuerdo de suspensión temporal para efectos de alzar dicha suspensión. Por ello no era evidente ni esperable que la trabajadora debiese presentarse a prestar servicios, si es que no



mediaba la existencia de alguna notificación formal que modificara los términos en que se había suscrito el pacto antedicho.

Dicha circunstancia no consta en el procedimiento, dado que no se ha acompañado ninguna prueba relativa a haberse avisado a la trabajadora del término de la suspensión y la necesidad de reintegro a sus funciones. En dicho escenario, la trabajadora sólo se enteró de que debía volver a prestar servicios una vez que recibió la carta de aviso de despido.

En virtud de lo expuesto, a juicio del Tribunal el despido ha sido indebido. La principal razón, es que no se ha acreditado la notificación del reintegro de funciones a la trabajadora suspendida, y por tanto no consta en el proceso que la trabajadora tuviera conocimiento de su obligación de volver a prestar servicios, luego de una suspensión iniciada el mes de mayo de 2020. Tal circunstancia es suficiente justificación a juicio del Tribunal para las inasistencias de los días 4 al 24 de enero. Consecuentemente existiendo justificación de las inasistencias, en cualquiera de las hipótesis planteadas por el artículo 160 número 3 del Código del Trabajo, el despido no se encuentra justificado.

Debido a lo anterior se condenará a la demandada al pago de las indemnizaciones establecidas en el artículo 162 inciso cuarto y 163 inciso segundo, esta última con el recargo de la letra C) del artículo 168, todos del Código del Trabajo. la valorización de estas prestaciones, de acuerdo al monto fijado como remuneración de forma pacífica es el siguiente: indemnización sustitutiva de aviso previo por un monto de \$350.215.- (Trescientos cincuenta mil doscientos quince pesos), indemnización por 11 años de servicio por el monto de \$3.852.365.- (Tres millones ochocientos cincuenta y dos mil trescientos sesenta y cinco pesos), recargo legal del 80% por un total de \$3.081.892.- (Tres millones ochenta y un mil ochocientos noventa y dos pesos).

CUARTO: Que, respecto del resto de las prestaciones solicitadas, se demandó por la trabajadora el pago del feriado legal y proporcional que indica en su demanda. Al respecto, la demandada no acompañó ningún documento que dé cuenta del otorgamiento durante la vigencia de la relación laboral, o en su caso la compensación una vez finalizada ésta, del feriado legal y proporcional demandado. Por el contrario, toda la prueba aportada por la parte demandada dice relación tanto con el pago de cotizaciones previsionales, como con la existencia del pacto de suspensión, el cumplimiento de las formalidades del despido y la acción relativa a la declaración de unidad económica. Adicionalmente la demandante



solicitó la audiencia preparatoria la exhibición de los comprobantes de vacaciones firmados por la trabajadora, los que no fueron acompañados por la empresa demandada. En virtud de ello se aplicó el apercibimiento del artículo 453 número 5 del Código del Trabajo, conforme a lo ya resuelto en el considerando segundo. Por ello, la sanción consiste en que el Tribunal puede estimar como probadas las alegaciones hechas por la parte demandante en relación con la prueba decretada. En el caso, la prueba decretada tenía por objeto justamente resolver la controversia respecto de la deuda del feriado que se demanda, y ante la falta de exhibición sin causa justificada de los comprobantes de feriado por la parte demandada se estimarán por probadas las alegaciones de la demandante, respecto de la cantidad de días de fería legales y proporcionales adeudados y de su monto.

Conforme a lo anterior, se ordenará el pago del feriado legal adeudado, por un total de 42 días corridos, por el monto de \$490.301.- (Cuatrocientos noventa mil trescientos un pesos), y del feriado proporcional correspondiente a 3,15 días corridos, por un monto de \$36.773.- (Treinta y seis mil setecientos setenta y tres pesos).

QUINTO: Que, en cuanto a la acción relativa a la nulidad del despido, se fijó como tercer punto de prueba el estado de pago las cotizaciones previsionales de la demandante. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 162 inciso quinto y siguiente, las cotizaciones previsionales deben encontrarse íntegramente pagadas a la fecha del despido, dándose cuenta de esta circunstancia por el empleador al notificar la carta de aviso.

En este sentido además de la prueba aportada por las partes se solicitaron oficios a AFP Habitat, AFC Chile y Fonasa, para que informaran la cartola histórica de pago de cotizaciones de la trabajadora entre diciembre de 2009 y enero del año 2020. AFP Habitat informó mediante respuesta a oficio de fecha 10 de enero del año 2022 dando cuenta que en el periodo indicado todas las cotizaciones previsionales se encuentran pagadas. al efecto entre diciembre de 2009 y junio del 2010 fueron pagadas por la demanda solidaria en autos. a partir de julio del año 2010 fueron pagados por la demanda principal, variando en ciertos periodos la remuneración imponible que se declaraba. En el periodo de diciembre de 2015, La totalidad del año 2016 y hasta noviembre del año 2017, existen diversos pagos de cotizaciones previsionales efectuados por la Subsecretaría de salud pública según la



información aportada por el oficio. Asimismo, el oficio da cuenta de que diversas cotizaciones provisionales de años anteriores fueron pagadas en el año 2021, como los periodos de diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre del año 2019, octubre, noviembre y diciembre del año 2020. Pese a ello se cumplió con el estándar exigido por la ley, al haber sido pagadas el día 21 de enero es decir días antes del despido.

El oficio remitido por Fonasa, por su parte, inicia en el periodo del año 2011 no constando fechas previas. En él hay constancia de Pago de todos los periodos que se señalan, hasta el mes de diciembre del año 2020.

Finalmente, el oficio remitido por AFC Chile da cuenta que desde diciembre del año 2009 hasta junio del año 2010 las cotizaciones previsionales fueron pagadas por la demandada solidaria, cambiando el Rut y empleador pagador desde julio del año 2010 por la demandada principal. Salvo ciertos periodos en que aparecen pagados por la Subsecretaría de salud pública, existe una continuidad de pago por parte de la demandada principal, sin perjuicio de existir periodos que fueron pagados el año 2021, correspondientes principalmente a cotizaciones adeudadas desde el año 2017 hasta el año 2020. No obstante lo anterior, y conforme ya se ha señalado a la fecha del despido las cotizaciones se encontraban íntegramente pagadas. Esta prueba además es coincidente con todos los certificados de pago que acompañó la parte demandada, emitidos por Previred.

Conforme a lo expuesto, no concurre a la especie el requisito principal de la acción de nulidad del despido, esto es que a la fecha de este las cotizaciones previsionales se encuentran adeudadas. habiéndose acreditado el pago de todas las cotizaciones a la fecha de término de la relación laboral, esto es el 25 de enero del año 2021, se rechazará la solicitud de declaración de nulidad del despido y el consecuente pago de las prestaciones reclamadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo.

SEXTO: Que, finalmente el último tema a resolver es la efectividad de que las demandas constituyan una unidad económica. El principal antecedente que sustenta la teoría del caso de la demandante es la sustitución de empleador ocurrida en el año 2010, que se ha acreditado mediante los certificados de pago de cotizaciones. De ello también dan cuenta los anexos de contrato del año 2010. Este cambio de empleador sin embargo no habría significado un cambio de funciones. Por tales circunstancias la autora sostiene que



ambas demandas deben considerarse como un único empleador para efectos laborales y previsionales dado que en estricto rigor prestaba servicios en favor de la demandada solidaria, ya que la naturaleza de los servicios prestados era de supervisoras de telemarketing para productos o servicios de la demanda solidaria.

Al respecto se solicitó oficio a la Inspección del Trabajo, el que pese a ser recibido, no fue incorporado en autos por la parte demandante. Por este motivo la demanda principal señaló que dicho oficio justamente perjudicaba las pretensiones de la contraria y por tales razones no se habría introducido al juicio. En este mismo sentido la demanda principal acompañó un oficio de unidad económica emitido por la dirección del trabajo de una causa diversa del año 2018. Este oficio si bien no concluye lo propuesto por la demanda en la individualización del documento, si indica las diversas fechas de constitución de las sociedades, los giros explotados y distintos domicilios y representantes legales de las demandas.

En consecuencia, la única prueba disponible para resolver este asunto es un oficio inconcluso, que constató que no se cumplen ciertos requisitos establecidos en el artículo 3 del Código del Trabajo; y la constancia de haberse sustituido el empleador de la demandante. Con dichos antecedentes a juicio del Tribunal no es suficientemente claro el hecho pretendido por la actora, de que las demandas deban ser consideradas como un único empleador para efectos laborales y previsionales. Sin perjuicio de que no se puede negar que existen indicios de tal circunstancia -dados los hechos relatados por la demandante respecto a sus condiciones contractuales y a la modificación que sufrió respecto del empleador sin que ello significara el cambio de funciones-, estas solas circunstancias, sin otra prueba concordante, no resulta suficiente para dar por establecido el hecho.

Por tales circunstancias deberá rechazarse la petición relativa a la declaración de unidad económica.

En cuanto a la petición subsidiaria, de declaración de existencia de régimen de subcontratación, tampoco se han aportado mayores antecedentes que permitan acreditar al existencia de prestación de servicios en dicho régimen, ni la existencia de relación contractual entre las demandadas, presupuestos necesarios conforme a lo dispuesto en el art. 183-A del Código del Trabajo. Al efecto no se solicitó la exhibición de documentos tendientes a acreditar esta relación contractual, ni se hizo uso de la prueba de absolución de



posiciones para tales efectos, no existiendo prácticamente ninguna prueba respecto al régimen de subcontratación, más allá de las afirmaciones de la demandante.

Por lo anterior, se rechazará también esta solicitud, y por ende la condena solidaria o subsidiaria de las demandadas.

SÉPTIMO: Que, las sumas señaladas deberán ser pagadas con los intereses y reajustes legales, establecidos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda.

OCTAVO: Que, no habiendo sido completamente vencida ninguna de las partes, cada una soportará sus costas.

Por tanto, en virtud de lo expuesto, y de lo dispuesto en los artículos 3, 33, 63, 67, 71, 73, 160, 162, 163, 168, 172, 173, 183-A, 420, 432, 453 y siguientes del Código del Trabajo, ley N°21.227 y demás normas legales aplicables, se declara:

- I- Que **se acoge parcialmente** la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones interpuesta por MARÍA TRINIDAD COFRÉ NUÑEZ, en contra de SERVICIOS INTEGRALES C Y C LTDA.
- II- Que, el despido de la demandante fue indebido al haberse aplicado la causal del artículo 160 número 3 del Código del Trabajo sin especificar la hipótesis por la cual se despedía a la trabajadora, y existiendo causa justificada para sus inasistencias, dada la falta de notificación del empleador del reintegro a las funciones luego de la suspensión.
- III- Que, producto de lo anterior, la demandada SERVICIOS INTEGRALES C Y C LTDA. deberá pagar a la demandante MARÍA TRINIDAD COFRÉ NUÑEZ las siguientes sumas por los conceptos que se indican:
 - a. Indemnización sustitutiva de aviso previo por un monto de \$350.215.- (Trescientos cincuenta mil doscientos quince pesos);
 - b. Indemnización por 11 años de servicio por el monto de \$3.852.365.- (Tres millones ochocientos cincuenta y dos mil trescientos sesenta y cinco pesos);



- c. Recargo legal del 80% por un total de \$3.081.892.- (Tres millones ochenta y un mil ochocientos noventa y dos pesos);
 - d. Feriado legal adeudado, por el monto de \$490.301.- (Cuatrocientos noventa mil trescientos un pesos);
 - e. Feriado proporcional, por un monto de \$36.773.- (Treinta y seis mil setecientos setenta y tres pesos).
- IV- Que la suma señaladas deberán ser pagadas con los intereses y reajustes legales establecidos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo según corresponda.
- V- Que, se rechaza totalmente la demanda respecto de la demandada THERMAS INTERNACIONAL SANTIAGO DE CHILE S.A.
- VI- Que, se rechaza en todo lo demás la demanda
- VII- que cada parte pagará sus costas
- VIII- Ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia cúmplase con lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT: O-1326-2021

RUC: 21-4-0323379-7

Resolvió don GUILLERMO ENRIQUE RODRÍGUEZ ÓRDENES, Juez suplente del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago, a cinco de mayo del año dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la presente sentencia.





A contar del 03 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>